

XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2015.

El largo proceso de revolución democrática boliviana. 1952-2014.

Alejandro Gil Blasco.

Cita:

Alejandro Gil Blasco (2015). *El largo proceso de revolución democrática boliviana. 1952-2014. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-061/350>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

EL LARGO PROCESO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA 1952-2015

ALEJANDRO GIL BLASCO, UNIVERSIDAD AUSTRAL.

CORREO: alejandrogilblasco@gmail.com

Resumen:

A lo largo de la presente ponencia se expondrá la concreción del largo proceso boliviano de transición democrática, acaecido desde 1952 hasta 2014. El mismo se estudiará históricamente alrededor de la conformación de los estados nacionales bolivianos del s.XX, entendiéndose car nueva forma estatal como el intento de articulación duradera entre modo de acumulación productivo y matriz sociopolítica. Mediante la presente ponencia se caracterizará al gobierno de Evo como la concreción histórica de la democratización revolucionaria del Estado, el paso de un Estado aparente a un Estado consciente en la articulación de modo y matriz. Asimismo se observará la integración de la población bajo un nuevo paradigma étnico-nacional de potencia constituyente en diferencia al momento del 52. El interés de esta ponencia descansa en la concreción de la revolución democrática boliviana desde 1952-2014”

Palabras clave:

Interautonomía-Matriz-Modo-Ideología-Estado

Articulaciones entre la ideología colonial y estructuras de poder liberales.

Durante el último cuarto del s.XIX tiene lugar la consolidación del modelo extractivista que remontará los sucesivos ciclos de contracción de la economía de las primeras décadas de la República boliviana a través de su vertiente exportadora. La concreción del reequilibrio de poder entre las grandes fuerzas oligárquico-liberales conformadas a raíz de la aprobación de la constitución de 1884, liberales y conservadores, se sintetizará en la ley de ex-vinculación promulgada por Tomás Frías el 5 de octubre de 1874. La importancia de esta ley reside en ser el ejemplo paradigmático de coexistencia entre una forma estatal liberal y de la ideología colonial:

“Mediante ella se declaraba jurídicamente extinguida la comunidad india y se prescribía la parcelación individualizada de las tierras comunales y la reforma del sistema tributario con el objeto de aplicar un impuesto universal a la propiedad en sustitución de la “contribución indígenal”. Esta legislación de corte liberal permitió — mejor que la torpe subasta decretada por Melgarejo— un acelerado y prolongado proceso de expansión latifundista, que se desarrollará durante los 40 años subsiguientes, afectando principalmente a las zonas del Altiplano pazeño, y en menor medida a los valles interandinos”(Rivera, 2010:84)

La base ideológica de esta ley consistía en la implementación de la propiedad individual, como paso necesario para la realización de una lógica capitalista de producción apoyada por una élite oligárquica-liberal, proceso ampliamente soportado en otras experiencias latinoamericanas de incorporación al mercado mundial por la vía oligárquico-dependiente. Si bien la ley, en posteriores revisitaciones (1881) reconocía los vínculos de propiedad de los indígenas con los territorios heredados del sistema hacendal colonial, el propósito de la misma supuso la liberalización del mercado de compra y venta de tierras, corrompiendo así la base secular de la identidad indígena y su relación con la tierra, extinguiendo jurídicamente la comunidad india al disolver la relación territorial de la misma.

La liberalización de la mano de obra indígena a través de la desarticulación comunaria implicó la legalización de los mecanismos de coacción extraeconómica servil-coloniales conocidos, entre otros, como *pongueajes* y *mitajes*, asentando sobre estos el grado de superexplotación necesario para desarrollar una actividad industrial-agraria residual a la consolidación del modelo de extracción minero. Y que en la práctica, posibilitó la creación paulatina de latifundios soportada por las inversiones de la élites políticas y económicas en proyectos de inversión.

“En Bolivia la casta señorial dominante básicamente se apropiaba del excedente de la agricultura y la minería por la vía de la contribución indígena, es decir, el tributo del trabajo indígena, tanto para mantener el estado o el poder político republicano, como a los señores locales. El estado en Bolivia no intentaba contener a su sociedad sino, por el contrario, negarla en lo ideológico y excluirla en buena medida en lo político.”(Tapia, 2002:340)

Reside, por tanto, en la esencia del desarrollo del capitalismo dependiente en su abigarrada forma boliviana el reconocimiento temprano de la contradicción esencial entre la ideología liberal y la supervivencia del hecho colonial, en su vertiente económica y en su vertiente ideológico-identitaria, con más violencia que en ningún otro caso en el continente. En su vertiente económica porque, como ya sabemos de los estudios del desarrollo del capitalismo en América Latina¹, la supervivencia de la desigualdad social de las estructuras socioeconómicas heredadas del colonialismo tuvo la facultad de incentivar su supervivencia para compatibilizar mecanismos de superexplotación asentados en prácticas pre-republicanas dentro de un contexto de liberalización de la mano de obra y creación de un mercado interno. Esto es, se produce el conocimiento temprano de que la articulación del sistema capitalista bajo las élites oligárquicas representa un hecho de dominación colonial que perpetuará una dinámica de exclusión sistemática de lo indio.

El centro dinámico de la acumulación capitalista en el continente pudo concretarse gracias a los mecanismos de coacción extraeconómica asentados en las prácticas de explotación pre-republicanas, lo que significaba para el asentamiento de una “conciencia de la modernidad” un importante centro de contradicciones desplegadas con mayor violencia simbólica en su vertiente ideológico-identitaria. “En el plano ideológico- dirá Silvia Rivera- este tejido de intereses reforzó la naturaleza excluyente y coactiva de la dominación oligárquica y le permitió reelaborar sus sustratos coloniales más profundos en el planteamiento de sus relaciones con el indio”(Rivera, 2010:85)

Dentro los proyectos de de una élite inspirada en el positivismo *social-darwinista*, que identificaba a la “cuestión india” como el principal escollo para la realización de la modernidad social, el proyecto de depuración racial representaba a todas luces un despreciable embiste oligárquico a la existencia de lo indígena, pero al mismo tiempo fue aquello que acabará por descomponer la legitimidad política de las élites tradicionales. No permitirá integrar el imaginario simbólico liberal a lo largo de la construcción de la memoria histórica boliviana que pretendía redefinir. La coexistencia de prácticas liberales en lo económico y en la organización política hallaba su límite de interiorización en el ser estatal en la coexistencia con la ideología colonial, enarbolada en el

“La propia ambivalencia y doble moral que atravesaba el discurso de interno de la oligarquía, su discontinuidad histórica como clase y su corto horizonte de memoria histórica habían brindado a los comunarios un flanco por el cual introducir sus demandas”(Rivera, 2010:107)

proyecto de las élites oligárquicas liberal-federalistas.

¹ Véase el ensayo de Agustín Cueva: “El desarrollo del capitalismo en América Latina”, s.XXI editores, 1984, México.

En el caso boliviano se libera con una mayor materialidad existencial la clásica contradicción e las democracias burguesas entre la libertad formal y la libertad real, entre la ciudadanía formal y la posibilidad de ejercicio de derechos reales, permitiendo la supervivencia de la reivindicación decolonial de los sectores indígenas que se desarrollarán a lo largo del siglo XX en constante oposición frente a los intentos de reformas de la propiedad y organización económica capitalista de la mano de obra y la imposición liberal-demagógica de la identidad de la minoría frente a la inobservancia de la identidad de la mayoría.

Lo que esta contradicción clásica esconde, debe ser entendido bajo el desequilibrio entre modo de acumulación y matriz sociopolítica² (pre)existente. Detrás de todos los procesos de desarrollo económico capitalista, y más agudizado en el caso latinoamericano, estoy hablando de la falta de correspondencia entre las necesidades de un modo de acumulación económico y el desarrollo de una matriz socioeconómica que asume la exclusión, tanto de la esfera de las relaciones sociolaborales mercantiles como de la esfera de la representación en las instituciones, como un factor estructural propio de crecimiento.

En el caso boliviano, la distinción es esclarecedora. Partimos de una matriz sociopolítica que hereda las estructuras de dominación políticas, mercantiles y simbólicas de la época pre-republicana, donde el grueso de la mayoría indígena queda excluida del período de la República liberal boliviana tanto a niveles socioeconómicos como representativos, siendo la ciudadanía- como el derecho a voto- un privilegio restringido por criterios de status, raciales y económicos, a una minoría mestiza ligada a los tradicionales vínculos señoriales oligárquicos e interconectada de forma más o menos precaria con el mercado mundial. Lógicamente, la domesticación en términos políticos y económicos de dicha matriz social y cultural comprendía las necesidades de incorporación de mano de obra a los proyectos de modernización económica, cuyos efectos multiplicadores se restringía a medida que se profundizaba la relación de enclave con el modelo socioproductivo.

Resulta un hecho histórico cómo la matriz sociopolítica o el modelo de acumulación acaban sucumbiendo bajo la forma de crisis cuando no se consigue alinear coercitivamente la composición orgánica entre las dos. La crisis se revela, por tanto, como un escenario de interpretación de la articulación matriz-modelo esencial, un espacio destinado a poner en cuestión términos de aglutinamiento identitario como nación, que revela una realidad social capaz de acelerar su construcción de subjetividad política. Es, por tanto, escenario de acumulación de contradicciones idóneo cuando nos e han conseguido desarrollar estructuras autónomas que encaucen la acción colectiva organizada. Como decía Zavaleta:

² Por matriz sociopolítica, aquí se entiende la relación con el modo de acumulación obtenida por la articulación entre Estado, sistema de representación y actores sociales, noción desarrollada por Garretón, M.A. en su texto: "Revisando las transiciones democráticas de América Latina" publicado en la revista Nueva Sociedad, nro. 148, Marzo-abril 1997, pp.20-29. En esta ponencia, el Estado será interpretado desde su facultad de estructuración de un régimen político determinado.

“La crisis es la forma clásica de revelación o reconocimiento de la realidad del todo social [...] La crisis, por tanto, no sólo revela lo que hay de nacional en Bolivia, sino que es en sí misma un acontecimiento nacionalizador: los tiempos diversos se alteran con su irrupción [...] Tal es el principio de la intersubjetividad” (Zavaleta, 1983:18)

Como resultado de esta crisis de correspondencia se produce necesariamente, en términos de René Zavaleta Mercado, una reforma de la *interautonomía entre Estado y Mercado*. Así que tenemos un escenario de análisis, donde la reforma de las relaciones Estado-Mercado que surgen tras una crisis económica, significa el escenario idóneo para la identificación de las contradicciones entre modelo de acumulación y matriz sociopolítica, que acaba teniendo un resultado de poder determinado, en la medida en que se genera un régimen político que dependerá de la respuesta incluyente a los nuevos principios de intersubjetividad. Cuanto más alejado esté la forma estatal de dicha construcción intersubjetiva de lo nacional, más profundas serán las disparidades representativas

Las formas estatales oligárquico-liberal(1884) , nacional-popular, (1952) neoliberal (1985) y plurinacional (2009) como formas de articulación del modo de acumulación productivo y de la matriz sociopolítica (pre)existente

Una de las principales características de todo modo de transición inetrcapitalista consiste en la reconfiguración de la relación entre un modo de acumulación y una matriz sociopolítica. La forma en que sea configuren sus diferentes composiciones, que representan la articulación entre régimen político, actores sociales y sistema de representación³, determinarán un conjunto de problemas estructurales que siempre se acaban resolviendo bajo la acción catártica de la crisis. El tipo de relación que quede establecido entre el sistema de representación y las formas estructurales de dominación, entre el grado de participación de los movimientos sociales- cuya emergencia política genera el desplazamiento del centro dinámico de creación de la praxiss política desde la participación institucional a la participación desde el espacio público; y el tipo de relación que se configure entre le régimen de poder dado y las exigencias que el grado de sacrificio de soberanía demanda para la internacionalización del capital local.

EL sacrificio de soberanía es, asimismo un sacrificio de autonomía, en el funcionamiento y en la capacidad de modelar las relaciones entre el modo de acumulación y la matriz sociopolítica (pre)existente. Es por ello, que toda agudización de una precaria interrelación entre modo y matriz se acaba disolviendo bajo el escenario político y/o económico de una crisis. Normalmente una crisis económica denota una crisis estatal, que puede llegar al colapso en un plazo de tiempo indefinido, sorprendiendo a veces su capacidad de supervivencia, porque el Estado es el resultado del proceso de subjetivización del grado de modernidad específico del capitalismo. Cómo una puede condicionar a la otra, la matriz al modo o el modo a la matriz, se intenta definir en lo que René zavaleta Mercado llamó la *interautonomía entre Estado y Mercado*. No existe, a mi parecer, una mejor definición de la relación entre la esfera estatal y la esfera de los mercados internacionales, en cómo la preponderancia de una afecta a la autonomía de la otra y cómo cada cambio que se produzca en una, condiciona la estabilidad de la otra.

Esta recomposición de la inetr autonomía entre el Estado y el Mercado, es la respuesta que se da en época de crisis, cuando colapsan los equilibrios entre el modelo de acumulación productivo y la matriz sociopolítica. No por nada, en la historia boliviana y quizás latinoamericana las crisis han sido, al mismo tiempo que el colapso de un modelo de organización sobre la que descansaba el desarrollo de las fuerzas productivas de un país, ⁴:

[...] la forma clásica de la revelación o reconocimiento de la realidad del todo social. [...] La crisis, por tanto, no sólo revela lo que hay de nacional en Bolivia sino que es en sí misma un acontecimiento nacionalizado: los tiempos diversos se alteran con su irrupción. Tú perteneces a un modo de producción y yo a otro, pero ni tú ni yo somos los mismos después de la batalla de Nanawa: Nanawa es lo que hay en común entre tú y yo. tal es el principio e la intersubjetividad (Zavaleta 1983:18)

Es por eso que, necesariamente, de toda crisis se sale con una nueva articulación entre Estado, actores sociales y sistema de representación, al mismo tiempo que con una nuevo grado de interautonomía entre el Estado y el Mercado. Durante las primeras fases del Estado oligárquico-liberal, las diferentes agrupaciones partidistas convenían en la aplicación del modelo extractivista como centro dinámico del desarrollo económico del país. Con el auge del modelo de exportación de minerales y la consolidación de un proyecto modernizador estatal liberal, las élites oligárquicas empezaron a encarar el protagonismo del manejo de las estructuras de poder políticas sin necesidad de recurrir a una intermediación militar caudillista para la organización del poder político.

Esta interiorización entre la oligarquía y el proyecto de modernización liberales Bolivia acabará por descomponer la legitimidad política de las élites dominantes del s.XX, que nunca consiguieron construir legitimidad política representativa de la verdadera mayoría social indígena al no haber sabido resolver la coexistencia entre élites oligárquicas, estructuras liberales e ideología colonial com canales de transmisión de la modernidad capitalista

El establecimiento del Estado oligárquico-liberal, cuyo escenario de concreción se dio en la Convención de 1880, donde la clase dominante se propuso ratificar la constitución de 1878, permitirá un ciclo de reconocimiento popular en el que el hecho estatal significará la unificación de las diferentes facciones de la clase dominante (Zavaleta 1978:18). Razonamiento este, que permite entender también la conexión entre crisis estatal y sistema de representación, y cómo cada vez que se ha producido una crisis profunda del Estado, se ha superado rearticulando los elementos de la matriz sociopolítica bajo una nueva forma estatal. La resolución de las contradicciones objetivas que se revelan en una crisis fueron requiriendo, cada vez más desde el 52, la incorporación de las masas indígenas política y culturalmente.

⁴ Extracto citado por Saint-Upéry, Marc en *¿Hay patria para todos? Ambivalencia de lo público y "emergencia plebeya" en los nuevos gobiernos progresistas*, artículo publicado en Iconos. Revista de Ciencias Sociales, n° 32, Quito, 2008, pp 78.

Fuera porque su virtud insurreccional expresada en las luchas de largo alcance de la tradición indígena anticolonial le disputó el espacio político a las élites dominantes, fuera por su progresiva toma de poder a través de la sindicalización como medio de interpelación institucional con el Estado, la acumulación de las experiencias históricas de movilización obrero-campesina desde el 52 estarán también orientadas a la profundización democrática de sus estructuras de representación y toma de decisiones. Al fin y al cabo, la democracia era considerado el escenario ideal de expresión de las demandas políticas y económicas populares. En concreto, siguiendo a Zavaleta se asentará definitivamente con “la crisis de fines del 79 en Bolivia [...] se refiere a un momento crucial de la autodeterminación nacional-popular [...] de la transformación del instinto clásico de la autodeterminación en democracia representativa convertida en una ambición de masa”

El Estado liberal-oligárquico (1884-1952)

El estado liberal-oligárquico emprendió toda una serie de reformas ambiciosas par crear un nuevo equilibrio entre modo y matriz, la imposición del servicio militar obligatorio y la profesionalización del ejército, la creación de una policía rural, una reforma monetaria, la modernización de los sistemas de extracción mineros, y la consolidación de la democracia aunque el censo electoral comprendiera a apenas el 5% de la población. Todo ello creaba las condiciones de un escenario político parlamentarista que propiciará, entre otras cosas, la llegada de partidos de izquierda y extrema izquierda al parlamento en la década del 30, amén de significar el control de la élite oligárquica de los centros de poder durante toda su existencia. El Estado liberal había realizado reformas políticas del orden de las tradiciones liberales parlamentarias y determinado el motor económico del país, se había producido una construcción de una nueva forma estatal y un régimen representativo.

Cada nueva forma estatal estuvo acompañado por un escenario de crisis, donde el modelo económico de desarrollo colapsa y la matriz sociopolítica comienza intentar recomponer su autonomía política. La Guerra del Chaco (1932-1935) que enfrentó a Bolivia y Paraguay por pretensiones soberanas sobre la región del Chaco Boreal fue resultado del reconocimiento del agotamiento de la articulación del modo y la matriz bajo la forma estatal oligárquica-liberal. Dicho proceso comenzó a fines de los años 20, cuando empezó a devaluarse los términos de intercambio basados en la exportación de la plata, síntoma de agotamiento de dicho modelo extractivista.

Hacia fines de la década de 1920, la “prosperidad liberal” se esfumaba como un espejismo y con ella caían por tierra las ilusiones de progreso indefinido que se había instalado en el sentimiento colectivo del criollo boliviano [...] Las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas que exportaba Bolivia y la propia lógica de acumulación del sector minero exportador habían terminado con la fase competitiva de la minería boliviana, dando paso a un creciente monopolio de la inversión minera. De la ruina de pequeños y medianos empresarios surge el excluyente grupo de los “barones del estaño” hacia las esferas de las finanzas y del capital internacional” (Rivera 2010:109)

Ya provengan los desequilibrios del modelo de acumulación y sus efectos en la matriz sociopolítica o sea la matriz sociopolítica la que irradie la incapacidad de articulación con el modelo económico en un tiempo histórico dado, las crisis resuelven una nueva nueva interpretación de la interautonomía entre Estado y Mercado bajo una nueva forma estatal que anide un sistema de representación nuevo.

Por ello se puede hablar de tres estados conformados bajo estos criterios en el s.XX: el estado liberal oligárquico, aproximadamente vigente desde el último cuarto del siglo XIX hasta 1952, el estado nacional-popular del 52, y el estado neoliberal instaurado a partir de 1985. Cada uno de ellos implicó un cambio del modelo económico y la ampliación del rol estatal en la des/articulación del sistema representativo y los movimientos sociales, expresados en sus reivindicaciones bajo la gramática clasista obrero-campesino, o bajo la voluntad de construir un liderazgo y una ideología comunitaria que reactualizara la connivencia entre las estructuras de poder y una práctica colonial de organización y aplicación del mismo.

Cada Estado, como decíamos, terminó de descomponerse bajo períodos de crisis. La del estado oligárquico-liberal se volverá irreversible por la conjunción de un ciclo de movilizaciones campesinas con reclamos autónomos, la guerra del chaco y el último embiste oligárquico-liberal de organización del poder protagonizado por el Pacto de la Concordancia de 1939, que venía compensar la deslegitimación del funcionamiento del aparato estatal-representativo y que acabará replegándose defensivamente en el sexenio de gobiernos oligárquicos (1946-1952).

En cada transición, asimismo, la movilización indígena fue determinante, reclamando cada vez más grado de apertura y reconocimiento conforme sus objetivos iban siendo cada vez más incontestables para el resto de sectores sociales, y siendo un ingrediente imprescindible de legitimación política, construida con cada insurgencia y lucha. Para el Estado liberal-oligárquico, la inclusión se dio a través de su convocatoria en la guerra civil de 1899, a partir de la cual se forjaría la leyenda del mallku aymará Zárate Willa como gran líder del movimiento indígena que apoyó al bando liberal en el enfrentamiento contra el bando conservador. La guerra civil no significaría sólo la crisis de la oligarquía, sino el comienzo de la acumulación de experiencias en la lucha anticolonial por el reconocimiento de derechos que se irán articulando en una ideología comunitaria nutrida en la confrontación con las élites dominantes y las formas represivas de sus aparatos estatales.

El Estado nacional-popular de 1952

Al Estado de 1952, le precedieron dos momentos críticos insurreccionales que tuvieron lugar en 1947 y 1949. La guerra del Chaco había preparado el escenario de convergencia identitario necesario para superar las diferentes visiones de la cuestión social de clase. La significación de la Guerra del Chaco como momento de construcción de una identidad nacional ha quedado inmejorablemente retratada por Zavaleta:

Se diría que la movilización de las clases nacionales, que en el Chaco aprenden que son irremplazables para los combates pero prescindibles y en definitiva ajenas a las decisiones del poder, se perpetúa en las minas, donde el proletariado vive una suerte de movilización permanente. En el Chaco, las clases nacionales —el proletariado, el campesinado y las capas medias— entran en contacto, se interpretan y crecen con sentido de pacto y, pues la vorágine de los derrumbes de la conducción oligárquica es más ostensible que en cualquier momento del pasado, se preparan para responder. (Zavaleta, 1967:36)

A los resultados trágicos del desenlace de la Guerra del Chaco, se alanza un cénit en la movilización campesina (1947) y minera(1949) que influirá en el debilitamiento terminal del Estado liberal-oligárquico y creará las condiciones de base sociopolíticas para la construcción del estado del 52.

A lo largo del artículo: “Forma clase y forma multitud del proletariado minero en Bolivia (Zavaleta, 1983) Zavaleta se propone la caracterización de la naturaleza política del proletariado minero boliviano de 1952, preocupado por reflejar la hibridez que el contexto de emergencia había conferido al desarrollo de una identidad clasista y de su centralidad como vehículo del movimiento democrático.

Una centralidad que el proletariado minero empezó a desarrollar a partir de la Tesis de Pulacayo de 1946 y que habría de construir manteniendo el centro de gravedad alrededor de la conciencia de clase obrera. Ahora bien, lo interesante de este esfuerzo intelectual es proveer una explicación desde *la descripción estructural a la sistematización de la política como lógica de coyunturas*, para comprender comportamiento político del proletariado minero conforme consolida un movimiento nacional-popular que se manifiesta como voluntad de poder con la revolución del 1952, perpetrada en alianza con el Movimiento Nacional Revolucionario.

Entender cómo un movimiento de claro protagonismo proletario, provisto por un locus minero que aporta la identidad histórica de lucha contra las estructuras capitalistas, con un programa claramente ultraizquierdista pueda finalmente demostrar “una *reciprocidad* mucho más importante de lo que se suponía con la burguesía que llegaba a la historia junto a ella” fue una de las contribuciones de Zavaleta. Las tensiones entre la forma multitud y la forma clase del proletariado minero boliviano debían ser las claves para la explicación de la deriva de una conciencia política identitaria sometida a la heterogeneidad estructural de su contexto de transición. Las mismas pretenden ofrecer las grietas a través de las cuales entender el desplazamiento de la centralidad del movimiento desde lo obrero a lo burgués, y la constitución de una identidad nacional monoétnica (la Bolivia mestiza).

A partir del 52 se construye una autonomía relativa de un Estado que realiza una serie de medidas que reconfigurarán las relaciones entre el modelo de producción y la forma de acumulación económico y la configuración de una nueva matriz sociopolítica que cometerá un gran error de comprensión de la demanda de articulación identitaria. Mediante “lo nacional”, la nueva coalición MNR-movimiento sindical minero-clases medias, articulaba *este precario equilibrio de fuerzas*.

impondrá una identidad nacional monoétnica, basada en el ideal del boliviano mestizo, que anulará la pluralidad identitaria de lo indígena en Bolivia. Bajo la fórmula de un nuevo sujeto político-identitario, y la incorporación de sectores indígenas a las estructuras del Estado, seguirá perviviendo la esencia de la contradicción entre ideología colonial y estructuras liberales, en la medida en que se persigue la imposición de una identidad étnica, configurando desde una jerarquía de resabios coloniales la categorización de la identidad indígena y limitando su coexistencia en estructuras de poder estatales.

1952 es asimismo la condensación de las relaciones específicas que mantendrá el Estado con el movimiento obrero y con el movimiento campesino, una vez trasladado el eje del debate desde lo étnico a lo clasista, imposibilitando la emergencia de una identidad indígena que contuviera la heterogeneidad de clase del sectores sociales indígenas.

En la forma estatal de reconocimiento de las luchas indígenas y su incorporación bajo su dimensión clasista, promueve la ruptura de esa experiencia constituyente de lo heterogéneo con unas demandas políticas y económicas colectivas, que anteriormente encontró Zavaleta en las “trincheras democráticas” de la Guerra del Chaco y que Silvia Rivera Cusicanqui encuentra también en la experiencia de diferentes sectores sociales de lucha en las cárceles tras la guerra civil del 1949,-que enfrentó a la oligarquía con el frente gestionado por el MNR y sectores mineros- lugar donde se empieza a gestar una nueva colectivización del movimiento insurgente.

De cualquier forma, el Estado del 52 sacude los cimientos del estado liberal-oligárquico, redefiniendo una nueva interautonomía entre Estado y Mercado. Bajo la forma de capitalismo de Estado, que retrata el aumento de la capacidad estatal en términos de alcance y de recursos-de una mayor autonomía- frente a actores locales e internacionales privados, El Estado del 52 consolida un modelo político y económico que busca articular a los sectores obrero y campesino bajo diferentes modalidades. El sector obrero, bajo su locus proletario-minero será integrado formalmente en órganos de decisión sindical en la gestión estatal de las mineras nacionalizadas. El movimiento campesino, por otro lado, tras la ilusión de construcción de autonomía de decisión en la organización de la cuestión del agro en Bolivia que pensó tener en el 52', será cooptado verticalmente bajo el denominado Pacto Militar Campesino⁵, que mantendrá en los años 60'c.

Como resultado de la consolidación del Estado del 52, se “llevaron a cabo la nacionalización de las minas, para fortalecer al sector estatal de la economía y reorganizar el curso de la acumulación capitalista, con impulso del Estado; reforma agraria, para destruir las relaciones de producción serviles en la agricultura y promover la ampliación del mercado interno; y voto universal, para dar expresión política a la democratización económica que debían traer consigo la reforma agraria y la educación rural”.(Rivera, 2010: 86)

El grado de intervención de la mayoría social indígena fue mucho más agudo que en anteriores ocasiones. LA incorporación formal del sindicato en la conducción de las empresas nacionalizadas, la extensión de la ciudadanía universal, resolvieron demandas colectivas, pero de forma equivocada. Al no estar atravesada por ellas el reconocimiento de la identidad plural de la mayoría social indígena, al someterla a categorías democrático-burguesas de lo nacional como mecanismo homogeneizador de la población, la multiculturalidad expresó la anulación de un reconocimiento pleno mediante la resignificación de lo *nacional* a través del proyecto de homogeneización cultural.

Cuanto menos, los sectores indígenas campesinos y obreros comenzaron a asentarse como unos actores fundamentales en la composición de un frente policlasista que abogara por derrocar al régimen oligárquico, y así eran considerados por los sectores sociales urbanos, fueran clase media, artesanos u obreros. La legitimidad de la presencia del locus minero que había sido fuerza de irradiación de un movimiento insurreccional hasta proyectar una *mayoría social de efecto estatal* consiguió canalizar la incorporación formal de los sectores clasistas subalternos al aparato estatal del 52.

⁵ El Pacto Militar-Campesino fue diseñado como una estructura institucional de enlace entre el sindicalismo para-estatal y el ejército, para sustituir a la articulación sindicato-partido-Estado vigente durante el período del MNR.(Rivera 2002:170)

Corría el 1974 y ante el quiebre de los frágiles equilibrios enmendados por la cooptación ejercida en el Pacto Militar Campesino, Bánzer (1971-1977) se declarará dictador e ilegalizará sindicatos y partidos. Este momento histórico es esencial para entender las vías que habrán de profundizarse en la necesidad de autonomía de las reivindicaciones obrero-campesinas, ya que significará el reconocimiento de “la imposibilidad de lograr términos de intercambio más igualitarios para los campesinos, ni retribuciones más justas por su trabajo, sin un replanteamiento de las relaciones entre campesinado y Estado, es decir, sin una radical reorganización de los sistemas de intermediación y representación político-sindical en el nivel local, regional y nacional (Rivera, 2010:51)

Estado Neoliberal

La guerra del agua y la guerra de Octubre por el gas, están inmersos en la crisis del sistema neoliberal en su capacidad de articulación con la matriz sociopolítica, creando un nuevo principio de intersubjetividad. A la crisis de los sistemas de partidos, a la renuncia explícita de estos acontecimientos a institucionalizarse bajo el régimen político neoliberal, acompaña un *reconocimiento de la realidad del todo social nacionalizador*, que deberá articular los tiempos de los diferentes modos de producción y de las experiencias históricas de la memoria social indígena construida en su lucha continuada contra las formas liberales de representación y la mutación instrumental de la supervivencia de las formas servil-coloniales de inclusión de las mayorías sociales indígenas. La crisis del Estado instaurado en 1985, caracterizado por la desarticulación de los sectores obreros y campesinos, por la privatización de la extracción de minerales y otras actividades productivas, y por la pauperización de las condiciones sociolaborales de las clases subalternas, tocará a su fin durante el ciclo rebelde de 2000-2005 y la aprobación de una nueva Constitución del Estado.

No sería el propósito de esta ponencia recurrir a la explicación del fenómeno neoliberal y su reforma de la autonomía del Mercado en detrimento de la autonomía del Estado, pero sirve para encuadrar por qué el Estado neoliberal debía ser la última manifestación de un correlación de fuerzas marcadas por lo colonial y las estructuras cálizicas de representación de la vida política liberales.

Para el propósito de esta ponencia, este punto resulta esclarecedor, ya que me he servido de los momentos de recomposición de esta interautonomía para entender los puntos fundamentales de quiebre entre el modelo de Estado, lógica de representación y capacidad de incorporación de las clases subalternas a un proyecto económico modernizador.

La composición del modelo de Estado, es mucho más complejo que la simple denominación de la forma estatal. Se debe comprender el Estado como un proceso continuo de subjetivización de la modernidad capitalista, que asume en sus estructuras las contradicciones de su modelo político y económico de dominación, y desde luego, cada nueva forma estatal retrata la transición entre un nuevo equilibrio efectivo entre el modelo de acumulación y su articulación con la matriz sociopolítica.

Los cambios de la composición del modelo de Estado, representan en última instancia un cambio de composición del régimen político y de los equilibrios de poder que se construyen en su interior. Cuando hablo de régimen político, se debe pensar en “el conjunto de las instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones”

(Levi, 2001:1362). Resulta lógico, por tanto, entender que la redefinición del modelo de Estado resultaba una prioridad para la larga revolución democrática boliviana, en la medida en que implicaba la recomposición institucional destinada a perpetuar un nuevo conjunto de valores políticos de inclusión. Por tanto, se necesitaba la superación e la fórmula de integración del 52, mediante la redefinición de lo *público* y lo *colectivo*, orientando la realidad estatal bajo una “noción de inclusión, con el Estado como garante tanto de una auténtica universalidad de la ciudadanía, como de un acceso efectivo de los menos privilegiados a los derechos y a los beneficios materiales y espirituales (en términos de estatus y de poder simbólico, por ejemplo) de la pertenencia a la colectividad nacional”(Saint-Upéry 2008:76).

Es menester de esta ponencia exponer cómo el conjunto de contradicciones derivadas de la falta de eslabonamiento entre la matriz sociopolítica y el modelo de acumulación va a ser una realidad que se habrá de mantener hasta la entrada en gobierno de Evo Morales, cuya toma de posesión se hizo en enero de 2006. Si analizamos, uno por uno, los componentes de una matriz sociopolítica y lo relacionamos con el modelo de acumulación impulsado por las élites, se podrá observar el campo discursivo de reivindicación histórica que expresaron la mayoría indígena en sus vertientes obreras y campesinas durante su relación con el estado liberal de principio de siglo, con el estado nacional-popular del 52 y el estado neoliberal de los últimos 20 años del s.XX.

Será únicamente bajo el gobierno del MAS, cuando se intente expresar una correlación material entre forma estatal, sistema de representación y actores sociales y su coexistencia con el sistema económico capitalista. Hasta el 1952 el Estado boliviano se manifestó bajo su forma aparente, objetividad ofrecida por la materialidad de su existencia histórica, pero que establecía por la naturaleza del ejercicio político de las élites una relación de subordinación del sistema de representación y de inclusión de los actores sociales.

A lo largo del proceso de consolidación de la victoria electoral del MAS, una de los acontecimientos estructurales determinantes fue la crisis del sistema de partidos del 82. Se ha conseguido identificar en los últimos años, cómo la forma neoliberal de Estado genera una crisis de representación que, antes o después, repercute sobre la legitimidad del funcionamiento del sistema de partidos como vehículo de institucionalización de las demandas sociales de las clases subalternas.

Prueba de ello es la falta de identificación de las demandas fragmentadas sectorialmente pero unificadas en el frente de lucha que supondrá la intervención e las masas indígenas en la guerra del Agua (2000) y la guerra de Octubre (2003), con la participación política por los canales establecidos en el sistema de representación. Las insurgencias indígenas contra las prácticas neoliberales de privatización de recursos públicos generó el desplazamiento automático del escenario de reivindicación desde el sistema de partidos, donde una corriente del movimiento katarista buscó incorporarse con poco éxito en los 80, hasta el escenario del espacio público. No es una novedad identificar como la toma del escenario público por la acción insurgente denota una crisis de representatividad del sistema político, pero sí es clave entender que las disparidades en la articulación de los diferentes componentes de una matriz sociopolítica acabará persistiendo hasta la llegada del MAS.

Es por ello que uno de los ingredientes fundamentales del MAS como instrumento de articulación entre la esfera sindical, la de los movimientos sociales y la de las clases subalternas indias- ya se expresaran bajo la gramática del sistema capitalista como obrera o campesina-supone una reconstitución de una matriz sociopolítica que nunca antes se llevó a cabo en sus 3 dimensiones. Dimensiones que a lo largo de toda la historia del s.XX seguirán conteniendo un escenario de indefinición, que se resolverá satisfactoriamente en el 2006.

Momentos de ruptura de la Corta memoria neoliberal, media memoria de lo nacional-popular, y larga memoria de lo colonial

La guerra del agua y la guerra de octubre, fueron insurrecciones desplegadas contra la privatización de los bienes públicos frente a actores transnacionales que formaba parte de la agenda de gestión neoliberal. Este “ciclo rebelde” pondrá en evidencia dos tipos de crisis. Linera hablará de una crisis “corta” del Estado neoliberal, cuyo principio de autoridad gubernativa se ve cuestionado por los movimientos sociales las organizaciones del poder local, y una crisis de “larga duración” del Estado republicano neocolonial (Linera, 2008:356). Para quien ha leído sobre Bolivia, esta tipología de crisis parece inspirada por las nociones de “memorias” de diferente duración e influencia, que desarrolla Stefanoni (Stefanoni, 2007)

Memoria de los nacional-popular

La “Masacre del Valle”, supone un punto de quiebre en la estrategia política campesina de reivindicar la reconstitución de las bases sociales establecidas formalmente en el 52. Este terrible evento marca el fin de la supervivencia de la memoria del poder campesino post-52 (Rivera 2002:48), generando un punto de quiebre en cuanto a las perspectivas de organización y realización de la lucha, desligando violentamente los objetivos de la lucha campesina de sus posibilidad de realización amparado en el ideal estatal forjado a raíz de la revolución del 52. La represión violenta de los manifestantes en el valle cochabambino de Tolata, significa la ruptura de las élites dominantes con las bases sociales del 52.

Tanto el movimiento campesino con las demandas surgidas de la nueva Reforma Agraria (1953) que no conseguían ser insitucionalizadas por la estructura burocrática del sindicalismo para-estatal, como el control coercitivo vertical ejercido durante el Pacto Militar Campesino, habían desactivado la implicación estructural del movimiento campesino.

Asimismo, el sector obrero también tendrá un momento de reconocimiento de la invalidez de los pactos interclasistas del Estado del 52. Los movimientos de cooptación represivaa e intimatoria que alcanzaron su sùmmum en las masacres mineral del 1965 y 1967.

Reactualización de la Memoria larga anticolonial: el katarismo como instrumento ideológico de realización del nacionalismo indígena-popular

Desligados los sectores obreros y campesinos del ideal nacionalista de la Revolución del 52, la memoria larga anticolonial, asentada en las insurrecciones contra la matriz ideológica colonial enarbolada con las formas liberales de dominación, empezará a ser capitalizada por una nueva generación de indígenas amaras en los años 60 que articulará una nueva ideología integracionista que superará las limitaciones de la nacional-popular del 52.

Si bien este no es el escenario concreto para desplegar la conformación del katarismo y su importante filtración a través de las estructuras simbólicas e institucionales de representación de los sectores subalternos, basta con reconocer para los propósitos de esta ponencia que será la fuerza ideológica encargada de articular las luchas anticoloniales del campesinado con la experiencia del poder sindical campesino en la fase participativa de la revolución nacional del 52. EL cual terminará por reorganizar el conjunto del aparato sindical rompiendo relaciones con el Estado y afiliándose a la Central Obrera Boliviana en 1979.

El katarismo resulta, pro tanto, imprescindible a la hora de entender la exitosa articulación entre el modelo económico y la matriz sociopolítica que configurará un frente popular de insurrección al orden neoliberal. Era el engranaje necesario para construir la nueva matriz sociopolítica, ya que propició la disolución de la diferenciación entre clase y etnia a la hora de promover una nueva identidad política nacional. Dejó, el katarismo, disponible la posibilidad de que lo nacional-popular, convergiera con la consideración de la larga memoria de lucha anticolonial.

Momentos de ruptura populista: Ciclo rebelde del 47-52 y Ciclo rebelde de 2000-2005

En este apartado he querido focalizarme sobre la caracterización de los momentos álgidos de acumulación de contradicciones sociales que acaban desembocando en una ruptura populista articulada, tras la crisis del Estado oligárquico-liberal y la crisis del Estado Neoliberal, bajo una redefinición en términos de interpelación identitaria del nacionalismo. La utilidad de la definición de ruptura populista (2006) hecha por Laclau descansa en la capacidad de interpretar estos dos ciclos rebeldes y su resultado en la composición de un frente policlasista. Según el teórico argentino, para que se produzca una ruptura populista:

“la condición ineludible es que haya tenido lugar una dicotomización del espacio social, que actores se vean a sí mismos como partícipes de uno u otro de dos campos enfrentados. Construir al pueblo como actor colectivo significa apelar *a los de abajo*, en una oposición frontal con el régimen existente. Esto implica que, de una forma u otra, los canales institucionales existentes para la vehiculización de las demandas sociales han perdido su eficacia y que la nueva configuración hegemónica [...] supondrá un cambio de régimen y una reestructuración del espacio público”(Laclau, 2006:57)

Antes del 52, se dan una serie de fenómenos determinantes en la capacidad de agregar bajo la forma-multitud una serie de actores que se veían condicionados por la formación social heterogénea

y su abigarramiento con los tiempos y formas económicos productivos. Zavaleta, habla ampliamente de la significación de la derrota de la guerra del Chaco. Nos explica lo importante que fue esta guerra desde el punto de vista de ruptura de las identidades irreconcilidas entre lo indígena y lo clasista, reuniendo en las trincheras a soldados - históricamente segmento de la población que acepta los términos e status de la sociedad colonial-capitalista y usa al ejército como vía de ascenso social - los indígenas del campo, los obreros de la ciudad y segmentos de las clases medias involucrados en las luchas.

Tanto la guerra del chaco (1932-1935) como la rebelión general del 47 y la guerra civil del 49, generan esos primeros momentos homogeneizadores bajo la construcción identitaria de la multitud, donde la experiencia en la confrontación y en la lucha rompe fracturas tradicionales en la composición de una identidad nacional colectiva. Preparan el terreno ideológico rompiendo las distancias entre los diferentes sectores sociales, urbanos y rurales, generando un momento de homogeneidad incluyente. Se trata de la lenta composición de la forma-multitud, que determina unos objetivos comunes y que “posibilita y/o problematiza, aun hasta su negación, la constitución de las formas estatales” (Antezana, 1991:56) porque entiende la necesidad de expresar en las formas estatales la articulación entre desarrollo económico e inclusión representativa.

La guerra del agua del 2000 y la guerra del gas en 2003 serán los momentos constituyentes de una nueva voluntad general, articulada a través de movimientos sociales, sectores sindicales y movilizaciones obrero-campesinas, que servirá de escenario para la constitución de la multitud al frente de la ruptura populista que acabará concluyendo la agonía de la crisis del Estado neoliberal con las elecciones nacionales del 2005 y la llegada al poder del MAS de Evo Morales.

Durante el ciclo rebelde de 2005, la forma ideológica de construcción de la multitud, sería la del nacionalismo indígena, “un nacionalismo indígena, en el que la reivindicación indigenista está atravesada por “el pragmatismo sindical” y el “antiimperialismo” [...] En consecuencia, la construcción de hegemonía del MAS se hace sobre la base de la recuperación de los imaginarios de los años 50 –desarrollismo, industrialismo, antiimperialismo- al que se incorpora una dimensión igualitarista étnica” (Errejón, 2011:79) que revalidan la determinación de la autonomía entre Estado y Mercado nuevamente bajo la forma de capitalismo de Estado, pero con una articulación de la matriz sociopolítica mucho más sólida, basada en los pilares de convivencia de la ideología comunitaria, el neodesarrollismo estatal, la integración con mayor grado de efectividad de sindicatos y movimientos sociales en un nuevo modelo de Estado.

Un nuevo modelo que se habrá de configurar con la asamblea constituyente de la que emanará la Constitución Política del Estado de 2009. Consolidando el hito histórico de “que, por primera vez en la historia republicana, el sujeto indígena puede articular la vertiente nacional-popular con su horizonte de autogobierno, en la construcción de un nuevo Estado” (Soruco, 2009).

Este momento de “ruptura populista” por cómo lo define Laclau, encajaría perfectamente con la visión que tiene García Linera del ciclo rebelde 2000-2005 que le sirve para validar su representación del campo político boliviano a través de dos polos antagónicos, organizados en torno a los ejes étnico-cultural (indígenas / criollos), de clase (trabajadores / empresarios) y regional (occidente / oriente) (Linera, 2004). Asimismo Silvia Rivera explica cómo tras la caída de la dictadura de Bánzer en 1976, se acabarán polarizando dos tendencias antagónicas en la superación

el legado estructural de la revolución del 52, una representada por el bloque neo-oligárquico empresarial que se erige de las ruinas del Estado del 52, y del otro un movimiento popular que gana en amplitud, pero que no consigue definir en ése entonces un proyecto estatal propio (Rivera, 2010:175) y que no lo hará hasta la victoria electoral del MAS en 2005.

Tras la victoria del MAS estos tres ejes comenzarán a articularse bajo una nueva visión ideológico-identitario de lo nacional, siendo quizá el eje regional que representa la pugna hegemónica entre el oriente y el occidente, el último en resolverse. Por ello, esta ponencia quería plantearse como hipótesis que sólo cuando el “eje regional” parece articulado bajo la nueva forma estatal con la victoria del MAS en las elecciones nacionales de 2014 en la región de Santa Cruz, la construcción política hegemónica del nacionalismo indígena impulsado por el MAS parece haber llegado a un punto clave de realización.

Vistos que los escenarios de ruptura populista se configuraron sólo tras las crisis del Estado del 52 y del Estado Neoliberal, queda encuadrado el por qué definiendo en esta ponencia una larga revolución democrática boliviana. La observancia de la emergencia de diferentes tipos de Estado, como resultado de la crisis de articulación entre modelo de acumulación productivo y matriz sociopolítica, sólo se empezarán a resolver más profundamente bajo un contexto democrático de elevación de demandas. Eso ha sido lo que me ha permitido hablar del período de luchas por una democracia inclusiva que sólo pudo surgir en la memoria colectiva tras la experiencia del 52 y que recompondrá el horizonte reivindicativo en términos democráticos con la llegada del MAS al poder.

La Victoria del MAS en el Oriente Boliviano en las elecciones generales de 2014 y la victoria de Soledad Chapetón en las elecciones municipales de 2015

La victoria del MAS en las elecciones generales del 2014, no sólo refrendó la gestión del presidente con un histórico 61% de apoyo electoral, sino que, por primera vez, el MAS había sido la fuerza política más votada en dos de las regiones que más se resistían a ceder espacios geográficos a la construcción hegemónica territorial del MAS: el Oriente boliviano, donde fue primera fuerza política en las regiones de Pando y Santa Cruz.

Por primera vez una fuerza política en representación de las clase subalternas había conseguido cooptar a las élites conservadoras del Oriente boliviano y conseguir extender su poder representativo a un territorio contrahegemónico al proyecto del MAS desde sus comienzos. Pareció la gran conclusión de uno de los proyectos históricos que se puso como meta el Estado del 52, la articulación de los tres ejes propuestos por García Linera en un mismo tiempo histórico, con la extensión de la hegemonía a lo largo del las diferentes geografía políticas del país. O lo que sectores de opinión contrarios al oficialismo han denominado como *pluriburguesía*, a la consolidación de nuevas élites económicas emergentes desde la llegada del MAS al poder que han conseguido articularse con las élites autonomistas orientales.

Si la victoria del MAS en el Oriente puede significar la realización una revolución democrática nacional-popular indígena que se consolida un proyecto histórico mediante cooptación de la élite empresarial y una base electoral oriental, la victoria de Soledad Chapetón es otro punto de quiebre que afianza la percepción de realización de una revolución democrática. Soledad, originaria de el Alto, ha sido la candidata por el Alto de Unidad Nacional desde el año 2010. Unidad Nacional, fue un partido político creado por Samuel Doria Medina, - dueño de la mayor cementera de Bolivia - en el 2010, dirigió el mayor frente de oposición al oficialismo del MAS y su candidata en el Alto, en las elecciones subnacionales de 2015 consiguió desplazar al ex-alcalde del MAS, Edgar Patana, como candidata más votada y, por tanto, alcaldesa.

No sólo se configura una líder mujer, sino que se consolida como alcaldesa una líder de origen aymará que vence por fuera de las estructuras de partido del MAS. La significación histórica de que un mujer de origen aymara venza al candidato oficialista en uno de los bastiones electorales tradicionales del MAS, el Alto, es profunda a muchos niveles. Por un lado, la política boliviana está abierta a la participación indígena por fuera del MAS como instrumento de incorporación política a partir de un partido opositor. Por el otro debe significar un punto álgido de apretura del sistema político representativo, que cierra el ciclo de revolución democrática comenzado en el 52, mediante el cual las bases sociales indígenas abrazan el escenario democrático como campo de reivindicación de su participación en la dirección del proyecto nacional.

Así, la victoria del MAS y la de Soledad Chapetón como alcaldesa del el Alto, son dos resultados de poder que advierten la articulación democrática más exitosa hasta la fecha entre forma estatal y forma económica con la matriz sociopolítica dada

Lo que aquí se expresa es que la construcción política del MAS ha generado 1) la ampliación de la autonomía estatal a través de la articulación de la forma Estado, que ha transitado de una forma aparente a una forma consciente mediante la promulgación de la CPE del 2009 y la consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia. 2) La ampliación del sistema de representación que ha posibilitado la incorporación de la mayoría indígena y la de los movimientos sociales y sindicales a las estructuras institucionales del Estado . El MAS se ha revelado un excepcional instrumento político por haber sabido construir una “intersección entre los horizonte indígena y nacional-popular que tenga la fuerza de construir lo inédito” (Ximena, 2009) esto es, un equilibrio estable entre modo de acumulación productivo y matriz sociopolítica.

Bibliografía

Antezana, Luis H: “ La diversidad social en Zavaleta Mercado”, Latin American Studies Center de la Universidad de Maryland, 1991.

Cabezas Fernández, Marta: “Bolivia: Tiempos rebeldes coyuntura y causas profundas de las movilizaciones indígenas populares”, ACSUR, 2005. Se puede consultar online en: <http://reliefweb.int/report/bolivia/bolivia-tiempos-rebeldes-coyuntura-y-causas-profundas-de-las-movilizaciones-ind%C3%ADgenas>

Fernando L. García Yapur: “A propósito de la crisis como método en Zavaleta Mercado”, publicado en revista Nueva Crónica, nº 131, septiembre de 2013.

Saint-Upéry, M. (2008): “¿Hay patria para todos? Ambivalencia de lo público y “emergencia plebeya” en los nuevos gobiernos progresistas” en Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 32. pp. 75-87

Stefanoni, Pablo : Las tres fronteras de la Revolución de Evo Morales: Neodesarrollismo, decisionismo, multiculturalismo” en Svampa M. y Stefanoni, P. Bolivia: Memoria, insurgencia y movimientos sociales. El Colectivo/ CLACSO. pp. 67-96

Soruco, Ximena: “Estado plurinacional-pueblo, una construcción inédita en Bolivia” en Observatorio Social de América Latina, CLACSO; Buenos Aires, año X, N° 26, octubre de 2009

García Linea, Álvaro: “Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política”. La Paz: Diakonía-Oxfam, 2004.

Garretón, M.A.:“Revisando las transiciones democráticas de América Latina” publicado en la revista Nueva Sociedad, nro. 148, Marzo-abril 1997, pp.20-29

Zavaleta, René. La autodeterminación de las masas / René Zavaleta; compilador Luis Tapia.– Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Clacso, 2009:

———-EL proletariado minero en Bolivia, texto extraído de Revista Mexicana de Sociología, año XI, vol. XV, No 2, México, 1978, pp. 517-559.

———-Forma clase y Forma multitud en el proletariado minero en Bolivia, 1983

———- La formación de las clases nacionales, 1967